

## **Comunicación de datos de deudores. Informe 72/2006**

La consulta plantea si resulta conforme a la LO 15/1999 que entidades bancarias comuniquen a una Diputación los domicilios de determinados deudores, incursos en procedimientos de apremios para la efectividad de las deudas tributarias.

Con carácter general, debe indicarse que la comunicación de datos solicitada constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la citada Ley Orgánica, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

Tal y como determina el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta regla de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, entre los que cabe destacar aquellos casos en que una norma con rango de Ley dé cobertura a la cesión.

Por ello, deberá determinarse si existe una la Ley que permita esa transmisión de datos y si ésta resulta de aplicación a la Diputación Provincial.

La Ley reguladora de las Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988 establece en su artículo 2.2 que “Para la cobranza de los tributos y de las cantidades que como ingresos de Derecho público, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias, debe percibir la Hacienda de las Entidades Locales de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, dicha Hacienda ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del Estado, y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes”, lo que en consecuencia determina que resulte de aplicación a la Diputación Provincial las prerrogativas contenidas en la Ley General Tributaria 57/2003

En el artículo 93 .1 de la Ley General Tributaria se autoriza la transmisión de datos dado que establece que “Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas.”

Del precepto transcrito se desprende la existencia de un deber de colaboración con la Administración Tributaria, que implicará, la comunicación de los datos necesarios para el ejercicio por dicha Administración de las potestades que la Ley le atribuye. Este deber bastará para considerar lícita la cesión por la aplicación del artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con los artículos 93 .1 de la Ley General Tributaria.

En todo caso, como cabe apreciar de los citados preceptos, la información que habrá de facilitarse será necesariamente la que revista “trascendencia tributaria”, por ser ésta la precisa para el ejercicio de dichas potestades. En este sentido, los preceptos deben coherer con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

De ello se desprende que los datos que habrán de facilitarse deberán ser los que resulten “adecuados, pertinentes y no excesivos” en relación con el ejercicio de las potestades tributarias.

Habida cuenta que en el supuesto sometido a informe los datos solicitados, revisten trascendencia tributaria, al tratarse de datos necesarios para la efectividad de la deuda tributaria, siendo preciso conocer el domicilio efectivo de determinados deudores en el curso del procedimiento de apremio, cabe concluir que el requerimiento efectuado y la consiguiente cesión de los datos se encuentran amparados por lo establecido en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 93 de la Ley General Tributaria